



**Ciencias Sociales Online**

revista electrónica

ISSN 0718-1671

URL: <http://www.uvm.cl/csonline>

Email: [jgibert@uvm.cl](mailto:jgibert@uvm.cl)

*Ciencias Sociales Online*, Noviembre 2007, Vol. IV, No. 3. Universidad de Viña del Mar – Chile

**DEL PROTECCIONISMO A LA DESREGULACION EN CHILE  
Y NUEVA ZELANDA (Primera Parte): REFORMAS NEOLIBERALES  
EN EL SECTOR PÚBLICO**

From proteccionism to desregulation in Chile and New Zealand (First Section):  
Neoliberals reforms in public sector

**Louisa Buckingham**  
New Zealand  
E-mail: [bucklj@gmail.com](mailto:bucklj@gmail.com)

**ABSTRACT**

Neoliberals reforms has been adopted by many countries all over the world. This paper analyzes the cases of Chile and New Zealand focusing in topics related to restructures of public sector in both, concerning specially in the phenomena of privatizations and state competence trasspassing from the central government to the local administrative units in education and health services.

Key Words: <Neoliberals reforms, public sector, proteccionism, desregulations>

Recibido: Mayo 2007

Aceptado: Septiembre 2007

## 1. INTRODUCCIÓN

Las reformas neoliberales adoptadas por un amplio número de países del mundo han transformado radicalmente tanto el concepto de Estado, su estructura, sus actividades, y sus responsabilidades, como el concepto de las fronteras nacionales como regularizadoras del flujo comercial y del capital extranjero. Chile y Nueva Zelanda han atraído interés dentro de la escuela de la reforma neoliberal como dos casos de gran interés por el alcance, la amplitud, la velocidad y los profundos efectos que han tenido las reformas de dichos países en el ámbito social, económico y político.

Este trabajo pretende estudiar la adopción del Nuevo Modelo Económico (NME) por dos países, Chile y Nueva Zelanda, a partir de 1973 y 1984 respectivamente, centrándonos en las circunstancias socioeconómicas previas al NME, el proceso de privatizaciones de las empresas estatales y la desregularización de los sectores de salud y educación y finalmente evaluando los efectos socioeconómicos posteriores ocasionados por la disminución del sector público. Sostenemos que las reformas económicas emprendidas en Nueva Zelanda a partir de 1984 tienen un alto grado de similitud con aquellas efectuadas en Chile durante las décadas de los 70 y 80. Ambos países que figuraban entre las economías con los más altos niveles de protección y regulación del mundo occidental fueron transformados precipitadamente en unos países con unas de las economías más abiertas al exterior, con un mínimo nivel de regulación. En ambos casos, los gobiernos anteriores al período de reforma en los dos países fueron regímenes altamente intervencionistas y de sesgo populista, dirigiendo una economía de índices macroeconómicos desequilibrados, mientras el programa de reformas fue llevado a cabo por un grupo reducido de economistas dentro del gobierno, sin (o con un mínimo de) discusión pública, y el período de las reformas neoliberales impulsó cambios profundos en sus regímenes políticos. Huelga decir que ambos casos han sido comparados con la Gran Bretaña de Thatcher (1). La diferencia más patente entre los dos países en cuanto a las reformas ha sido el contexto político en el que se acometieron los cambios. Mientras que el uno se embarcó en las reformas por convicción propia bajo un gobierno democrático laborista, el otro emprendió los cambios económicos bajo una dictadura acusada hoy día de graves crímenes contra los derechos humanos.

El trabajo postula que la reducción del sector público paralelamente a la liberalización de los mercados ha beneficiado, en términos generales, el crecimiento económico y la competitividad de los países en los mercados internacionales. No obstante, los índices macroeconómicos han mejorado en concomitancia con un progresivo aumento de los indicadores de desigualdad y el empobrecimiento de la clase media y la clase media baja de la población durante la década posterior a la transformación del sector público. Los regímenes respectivos no lograron detener este declive del nivel de vida. La focalización de los programas sociales de ayuda al estrato más pobre excluyó a las clases media y media baja, a pesar de que este sector sufriera en la misma medida el desempleo y los cortes de los servicios públicos gratuitos.

## 2. LAS CONDICIONES INICIALES: ANTECEDENTES ECONÓMICOS

En este apartado ofrecemos un breve resumen del proceso de desarrollo económico en cada país durante las décadas previas a la reestructuración neoliberal.

### 2.1 Chile

Mientras el temprano desarrollo socioeconómico de Chile estuvo dominado económica y políticamente por los grupos poderosos de la oligarquía terrateniente y de los inversores extranjeros, con el desarrollo de otros sectores productivos como la minería, la industria, las actividades comerciales y financieras, el poder de la oligarquía terrateniente disminuyó en favor de nuevos actores. Los inversores extranjeros, sobre todo los británicos y los estadounidenses, controlaban en buena medida los sectores del salitre y del cobre respectivamente. Debido a la fuerte concentración del sector productivo, las exportaciones de salitre financiaron la modernización del país y la expansión del sector público (Malamud, 1995).

Durante el siglo veinte, el Estado ejerció un papel más directivo en el desarrollo del país. Como respuesta a la recesión de los treinta, el Estado aplicó medidas proteccionistas al sector externo, y estableció su papel directo en los procesos productivos y en la promoción del desarrollo mediante la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939. Según Meller (1996), entre 1940 y 1970 CORFO se transformó en el principal instrumento para promover el crecimiento del país según el modelo de desarrollo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Disponía de un presupuesto con la finalidad de formular programas de desarrollo y de asignar los recursos adecuados para la financiación de proyectos de inversión. Las mayores empresas estatales en los sectores industriales fueron establecidas por CORFO: la Empresa Nacional de Electricidad, (ENDESA) en 1944, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) en 1946, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en 1950, la Industria Azucarera Nacional (IANS) en 1952.

La expansión del gasto público extendió la cobertura social (educación, servicios de salud y seguridad social) a toda la población, y condujo a índices de desarrollo humano de entre los más altos en América Latina (French-Davies, 1997:38-39). Hacia 1970, la tasa de escolarización (6-14 años) alcanzó el 94%, la participación de la población en el sistema de seguridad social era del 70%, mientras la relativa baja tasa de mortalidad infantil reflejó el acceso gratuito al servicio de salud y la provisión del mismo tanto en zonas rurales como urbanas (Raczynski, 1995:208).

No obstante, durante el período de 1950 a 1970, la economía chilena se caracterizó por una alta inflación crónica, crecimiento moderado y frecuentes crisis de la balanza de pagos. El crecimiento del gasto público creó tendencias deficitarias en los presupuestos, que intensificaron las presiones inflacionarias de la economía. Como en el caso de Nueva Zelanda (y otros países latinoamericanos), durante la época de la posguerra hasta la adopción del NME, el papel del sector público fue amplificado sustancialmente, en parte por la adopción de la estrategia de ISI apoyada en altos niveles de aranceles y otras barreras no arancelarias al comercio libre. Estas características se reforzaron durante el período de 1970 a 1973, en el que la cantidad y la cobertura de las intervenciones y controles del gobierno alcanzaron un nivel extremadamente alto.

#### 2.1.1 El gobierno anterior a las reformas (1970-1973)

En 1970, la Unidad Popular (UP) asumió el gobierno con Salvador Allende como presidente. Estimando que el patrón de desarrollo económico vigente era demasiado lento, y responsabilizando del retraso al control de la economía por monopolistas extranjeros y

nacionales, el nuevo gobierno introdujo cambios estructurales profundos que asignaban al Estado un mayor control de la economía con el fin de transformarlo bajo el esquema de un Estado planificador central. La participación de las empresas estatales en el PIB subió de un 14.2% a un 39% (Meller, 1996:81).

Como explica Hachette & Lüders (1987:60), las reformas estructurales de la UP abarcaban esencialmente tres ámbitos: la nacionalización de los principales recursos del país (la Gran Minería de cobre, carbón, salitre, hierro y acero) y la estatificación del sistema bancario; la expansión del Área de Propiedad Social (APS) a través de la estatificación de las empresas industriales más grandes y, finalmente, la intensificación de la reforma agraria. La reforma agraria era una parte importante del programa de la UP. En el primer año de gobierno, se expropió casi el mismo número de latifundios que durante todo el gobierno de Eduardo Frei entre 1964 y 1970, en el segundo año la intensificación del proceso prácticamente acabó con los latifundios.

Durante el primer año de gobierno, la economía chilena vivió un auge sin precedentes como resultado de las políticas económicas altamente expansivas. Se pretendía reactivar la economía mediante el elevado gasto público con inversiones en el Estado de bienestar, políticas redistributivas y en las reformas estructurales del sector público. El brusco aumento del gasto público se debe fundamentalmente al aumento de la plantilla del sector público, el incremento de los salarios y la expansión del programa de construcción de viviendas, y fue financiado en gran parte con una mayor emisión monetaria, aunque la tasa de inflación se controló inicialmente mediante los controles de precios en el sector privado y la congelación de tarifas y precios en el sector público (Montecinos, 1998; Harberger, 1996). Sin embargo, la expansión del gasto público no resultó sostenible y la estatificación de las grandes empresas contribuyó al empeoramiento de la situación económica. Durante 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementó en un 2,3% del PIB, debido en parte a la subvención con tarifas públicas y a problemas de gestión de estas empresas (Larrain y Meller, 1990; Meller, 1996).

La sociedad chilena se hallaba muy dividida en su apoyo al programa de la UP en parte por las estatificaciones y la reforma agraria, y en parte por el deterioro económico. Hasta 1973 la economía chilena se había deteriorado significativamente, generando condiciones catastróficas: una tasa de inflación incontrolable, huelgas laborales extendidas y una escasez de bienes básicos. La situación empeoró drásticamente por la fuerte oposición a las expropiaciones de propiedad privada y las divisiones políticas. El gobierno de la UP terminó violentamente en septiembre 1973 con el golpe de estado dirigido por el General Pinochet a la cabeza del ejército chileno.

## 2.2 Nueva Zelanda

El Estado en Nueva Zelanda siempre ha tenido un papel central en el desarrollo y regulación de la economía, no solamente como proveedor de una amplia gama de bienes, servicios y prestaciones sociales, sino también como directivo de los sectores de las finanzas, energía, transporte, agricultura, y telecomunicaciones. Hasta la década de los ochenta, los gastos del sector público sumaron el 44% del PIB (Massey 1995:4).

Como respuesta a *shocks* externos, Nueva Zelanda ha tenido una fuerte tendencia a aislarse detrás de barreras al comercio y subvenciones a los sectores productivos. El proteccionismo aseguró al país el pleno empleo, mientras las subvenciones y medidas proteccionistas a empresas e industrias de poca rentabilidad fomentaron una producción de pequeña escala y alto coste, además de desincentivar el establecimiento de empresas competitivas en el mercado internacional y la diversificación de la canasta exportadora. Un informe de la OCDE observa que la composición del sector manufacturero apenas cambió entre 1950 y 1979 (OCDE, 1996).

La visible contracción del crecimiento económico, particularmente durante los años previos a la adopción del NME, refleja la sensibilidad de la economía del país ante factores exógenos, debido en parte, como en el caso de Chile, a la alta concentración de la canasta exportadora y de los mercados de destino. Por ejemplo, la recesión en el año 1968 se debe a la caída del precio de la lana, un producto cuyo valor superó el 30 % de todas las exportaciones (Dalziel & Lattimore, 1991:12), repercutiendo en un descenso notable en los ingresos reales por habitante. Luego, la entrada de Gran Bretaña en la UE en 1973 condujo a la pérdida del primer socio comercial del país, mientras la crisis de petróleo en 1975 afectó a todas las economías con un alto grado de dependencia energética del exterior, y entre 1975 y 1982 apenas se registró un leve crecimiento del PIB mientras la balanza de pagos cayó un 45% en este período (Massey, 1995:14). Además durante esta época el desempleo se destacó por primera vez como un serio problema social; después de alcanzar casi el 2% en 1979, la tasa de desempleo siguió creciendo durante la década de los ochenta hasta superar el 14% en 1993 (Dalziel & Lattimore, 1991:114).

### **2.2.1 El gobierno anterior a las reformas (1975-1984)**

El partido conservador ganó las elecciones de 1975 y se mantuvo en el poder durante nueve años sucesivos con Robert Muldoon ejerciendo el cargo de primer ministro y ministro de finanzas simultáneamente. Confrontado con la crisis de petróleo de los setenta y la subsiguiente recesión económica, el período de su gobierno se caracterizó por una política fiscal expansionista (de corte keynesiano) que se reflejó rápidamente en altas tasas de inflación y un deterioro de la balanza de pagos. El gobierno invirtió en programas nacionales de empleo para afrontar la aumentada tasa de desempleo, además de incrementar las pensiones nacionales y las subvenciones a los agricultores.

A partir de 1980, los mega-proyectos estatales en los sectores de energía y de acero contribuyeron a empeorar el endeudamiento del Estado además de suponer grandes pérdidas económicas. Este tipo de proyectos no se dieron en el mundo desarrollado, aunque fueron muy comunes en el contexto latinoamericano del modelo de desarrollo de ISI. El resultado para la economía del país fue un endeudamiento de proporciones alarmantes y la creación de empresas que nunca lograron ser rentables.

El resultado de las políticas fiscales expansionistas fue un aumento de la deuda interna, una caída del PIB real a finales de los setenta (Dalziel & Lattimore, 1991:114) y la generación de altas tasas de inflación que superaron en un 50% la tasa promedio de la OCDE durante la mayor parte de los setenta y ochenta (Spencer, 1989:50). El gobierno respondió congelando los salarios, los precios y los tipos de interés entre 1982 y 1984. Con una economía estancada por el nivel de endeudamiento, regulación y desempleo, se ha calificado el mandato del gobierno conservador de Muldoon como un período de prolongada demora de las reformas necesarias.

## **3. LAS REFORMAS NEOLIBERALES EN CHILE Y NUEVA ZELANDA**

### **3.1 Chile**

La transformación del Estado y la economía chilena se puede dividir fundamentalmente en dos etapas: de 1973 a 1982, y de 1983 a 1989, interrumpidas por una fuerte crisis financiera en 1982 y 1983 que impulsó varios ajustes en el modelo, y consistió principalmente en la eliminación del Área de Propiedad Social y restitución a sus antiguos dueños de empresas y tierras expropiadas por parte del gobierno de la UP (reprivatización), la privatización de las empresas privadas creadas por CORFO, el aumento de la eficacia de las empresas públicas, la reducción del gasto público y eliminación del déficit fiscal y reformas tributarias (Meller 1996:184). A diferencia de otros gobiernos militares latinoamericanos, la dictadura del General

**Louisa Buckingham:** Del Proteccionismo a la Desregulación en Chile y Nueva Zelanda

53

(Primera Parte): Reformas Neoliberales en el Sector Público

*Ciencias Sociales Online*, Noviembre 2007, Vol. IV, No. 3 (49 - 66).

Universidad de Viña del Mar-Chile

Pinochet no manejó la economía del país, sino que dejó libre el escenario económico a la actuación de un grupo de jóvenes economistas conocidos como los *Chicago Boys*. Con el cierre del Congreso, la suspensión de la Constitución y la prohibición de los partidos políticos, el contexto político no ofreció ninguna posibilidad de diálogo o consulta con grupos de interés, ni la opción de ejercer oposición alguna, con el severo castigo de manifestaciones abiertas de descontento (Montecinos, 1998). Las torturas, las desapariciones y las ejecuciones cometidas bajo el régimen dirigido por General Pinochet siguen siendo tema de actualidad en los medios de comunicación de hoy. A pesar de los fuertes costes sociales y las crisis económicas experimentadas durante la dictadura de Pinochet, el modelo económico (con varios ajustes) fue mantenido.

### **3.2 Nueva Zelanda**

El programa de reforma económica en Nueva Zelanda transcurrió durante una década: el Primer Ministro Lange del partido laborista inició la primera etapa de 1984 a 1990, mientras el gobierno conservador, encabezado por el Primer Ministro Bolger, dirigió la segunda etapa de 1990 a 1993. El conjunto de reformas introducidas a partir de 1984 contempló tanto la transformación del sector público como la desregulación de los sectores financieros y comerciales, mientras reformas adicionales al sector público en los ámbitos de salud, educación, recortes en las prestaciones sociales y reformas al sector laboral siguieron a partir de 1990 (Stephens, 1987; Walder, 1989).

En ambos países, se iniciaron las reformas en un contexto económico con fuertes desequilibrios macroeconómicos. En Chile, el contexto inflacionario en 1973 de entre el 300% y el 600% anual era extremo (Meller 1996:119), mientras en Nueva Zelanda, la nueva administración que asumió el gobierno en 1984 introdujo una fuerte devaluación de la moneda de un 20% (Dalziel & Lattimore, 1991). Frente a la crisis financiera en ambos países, se propuso aminorar el déficit fiscal, principalmente mediante una reducción del gasto público, y los objetivos a medio plazo consistieron en la atenuación o eliminación de las regulaciones estatales, y la mengua de la presencia dominante del sector público a través de políticas de desregulación del mercado, privatizaciones de empresas estatales y la descentralización de las actividades y los servicios públicos.

La secuencia de las reformas económicas de Nueva Zelanda y Chile fue diferente. Mientras en Nueva Zelanda el proceso de las privatizaciones fue posterior a la liberalización del sector comercial y financiero y relativamente lento, en Chile, el proceso de las privatizaciones acometió a la vez la liberalización del sector comercial y del mercado financiero nacional durante los primeros años de las reformas (1974-1975).

### **3.3. La reformas al sector público: Consideraciones teóricas sobre el proceso de privatizaciones**

De la amplia experiencia del proceso de privatización que muchos países han tenido en las últimas décadas surge una serie de consideraciones referentes al proceso de privatización, a saber, el orden de privatización de los diferentes sectores del mercado, la reestructuración de las empresas anterior a su puesta en venta y, finalmente, los diferentes modos de privatización (Boeker, 1993).

El tamaño relativo de las empresas incide en la decisión concerniente el orden de privatización; lógicamente, la venta temprana de las empresas pequeñas del sector manufacturero presenta menos complicaciones que la venta de los grandes monopolios, bancos, empresas de seguros y utilidades públicas. La desregulación del sector respectivo anterior a la venta de la empresa pública evita la transformación de una empresa monopolista pública en una empresa monopolista privada. En cuanto a la prioridad de privatización de cada

uno de los distintos sectores estatales, después de la experiencia de Chile en los setenta, se recomienda la venta de los bancos hacia el final del proceso de reforma. En el caso chileno, los bancos fueron vendidos a conglomerados emergentes (grupos) no completamente solventes que los utilizaron para financiar la adquisición de firmas posteriormente privatizadas. Durante este proceso, los bancos recién privatizados concedieron un gran volumen de préstamos de alto riesgo, muchos de ellos a empresas que pertenecían al mismo conglomerado. El proceso produjo la gran crisis financiera de 1982 y 1983, cuando varios de los bancos más grandes se volvieron insolventes, y el gobierno asumió su control (Meller, 1996). No obstante, existen otros argumentos a favor de privatizar los bancos al comienzo del proceso. Por ejemplo, la reestructuración y modernización del sector manufacturero requiere financiamiento, que suele ser difícil de obtener bajo el tradicional sistema bancario estatal.

También surge el problema de la reestructuración de la empresa previa a su venta. Desde una perspectiva económica, esta transformación suele tener altos costes tanto en cuanto a la modernización como en cuanto al despido de empleados. En Chile, el alto coste de reducir la plantilla se evitó en parte por medio de un convenio con los sindicatos, según el cual los empleados consintieron su despido a cambio de recibir una parte de las acciones de la empresa (Boeker, 1993; Meller, 1996).

Los procesos de privatización son de diversa índole, Edwards (1995) distingue entre por lo menos cuatro modos de privatización: la venta de la mayor parte de las acciones a una empresa privada o a un consorcio; la oferta inicial de acciones en bolsa (nacional o internacional); la compra por parte de los empleados; la liquidación de la empresa y sus activos. La elección de un modo depende de las circunstancias particulares en cada caso; por ejemplo, como Edwards (1995) sostiene, la oferta de acciones al público o a los empleados (a veces a precios favorables) suele promover una amplia base de apoyo al proceso de privatización, y evita la concentración de la tenencia de una empresa o de un sector en pocas manos (el trato preferencial a empleados fue ampliamente utilizado en Chile como manera de reducir la oposición política y social al proceso); la venta de un porcentaje mayor de acciones suele asegurar una venta rápida y de mayor precio; la oferta de empresas en una bolsa extranjera puede aumentar la presencia internacional de inversores además de señalar la seriedad del respectivo gobierno frente al proceso de privatización (2); finalmente, la venta de la empresa a sus empleados suele disminuir la oposición al proceso de privatización. Con frecuencia se combinan los métodos de privatización tanto para conseguir varios objetivos como para limitar el grado de oposición política al proceso.

Un último punto que contemplamos aquí se refiere al tipo de financiamiento implementado. En adición a la compra exclusivamente en efectivo, un programa de deuda-valores swap fue ampliamente utilizado en Chile en la segunda etapa de las privatizaciones para atraer la inversión extranjera (Meller, 1996; French-Davies, 1998; 1999).

### 3.3.1. Chile

Hatchett & Lüders (1993) destacan el papel de Chile como pionero entre los países latinoamericanos en el proceso de privatización por adelantarse a México, que comenzó en la década de los ochenta, y a Argentina, que comenzó a partir de 1989. Entre 1974 y 1992, Chile privatizó más de 500 empresas; Marcel (1989:34), comparando el programa chileno con el británico, acierta que “el programa chileno destaca no sólo por su extensión, sino por su velocidad”(3). El proceso, dirigido por la empresa estatal CORFO, se hizo en dos etapas, la primera en la década de los setenta, la segunda en los ochenta después de la crisis de 1982 y 1983 durante la cual el gobierno asumió el control nuevamente de unos cincuenta bancos y empresas. La primera etapa de privatización tuvo, a su vez, dos estadios distintos. El primero involucró la reprivatización, es decir, la devolución de empresas requisadas durante el

gobierno de la UP a sus accionistas anteriores. La segunda etapa promovió la venta de un gran número de bancos y empresas al sector privado, algunos de los cuales habían sido nacionalizados durante el gobierno de la UP. A pesar de la existencia de legislación para evitar la concentración de propiedad, los bancos fueron en su mayoría comprados por conglomerados emergentes (los grupos).

Después de los bancos, se ofrecieron numerosas empresas manufactureras a la venta. Entre 1974 y 1978, 114 empresas fueron privatizadas y 259 empresas reprivatizadas (Meller, 1996). En su intento de vender un gran número de empresas rápidamente, el gobierno no las reestructuró antes de ofrecerlas a la venta, y muchas tenían serias dificultades financieras, mientras todas sufrían de una muy baja productividad. Se esperaba que los nuevos dueños emprendieran los pasos necesarios para mejorar su eficacia y con este fin, el gobierno impuso pocas restricciones al derecho de los nuevos dueños a reducir la plantilla. Visto retrospectivamente, el coste de reestructurar las empresas resultó ser muy alto, y durante muchos años la mayoría de las empresas privatizadas incurrieron en grandes pérdidas (Edwards, 1983).

La crisis financiera de 1982 y 1983 fue ocasionada por la insolvencia y el colapso de varios bancos privatizados. Adquiridos por los grandes conglomerados, estos bancos fueron utilizados luego para financiar la adquisición de otras empresas en vías de privatización. El Banco Central tuvo que intervenir en varios bancos comerciales, liquidando algunos y facilitando crédito a otros, cuya *cartera mala*, o préstamos incobrables, superaban el patrimonio del banco. En la segunda etapa de privatizaciones, el gobierno evitó expresamente la situación de que pocos (técnicamente insolventes) conglomerados adquirieran un gran número de empresas (Meller, 1996).

La segunda etapa tuvo el objetivo importante de potenciar una participación más amplia en el proceso de privatización (Hatchett & Lüders 1993). Algunas instituciones financieras, entre las que se incluían dos bancos fueron privatizados en el marco de un programa conocido como *capitalismo popular*, según el cual particulares pudieron comprar un número limitado de acciones (hasta siete mil dólares) por debajo del valor del mercado. El gobierno privatizó una selección mucho más amplia de empresas, incluyendo empresas que siempre habían sido parte del sector público como el transporte aéreo y los servicios públicos de agua, gas y electricidad. En esta etapa el gobierno ejerció el pragmatismo de aprovechar varios modos de privatización. Acciones fueron vendidas a los empleados (generalmente a precios favorables), a fondos de pensiones, a empresas privadas nacionales e internacionales. El capital extranjero tuvo una parte activa en esta segunda etapa, aprovechándose el programa de deuda-valores swap, llamado *Capítulo 19* (4).

Con el fin de aumentar la eficiencia de las empresas estatales, tres nuevos principios rigen su comportamiento, que, como veremos seguidamente, también fueron llevados a cabo en Nueva Zelanda: el principio del autofinanciamiento (las empresas estatales no reciben transferencias o crédito del gobierno central; tampoco pueden contraer endeudamiento externo); la subcontratación de una parte de las actividades; y, finalmente, la libertad (hasta cierto punto) en la fijación de precios. El resultado de estas medidas se ha podido observar dentro de un período de tiempo relativamente breve: en 1973, las empresas públicas tenían un ahorro negativo y un déficit que representaban respectivamente el 8% y el 10.4% del PIB; mientras que en 1976 esos porcentajes supusieron un ahorro positivo del 1.6% y un déficit del 0.1% (Meller, 1996:188).

### 3.3.2. Nueva Zelanda

La reforma del sector público en Nueva Zelanda se centró en primer lugar en la desregulación y la reestructuración del sector. A diferencia de Chile, el proceso de privatización no ocupó la posición central de la reforma del sector público, sino, en la mayoría de los casos, fue acometido como el paso final después de 'corporativizar' la empresa respectiva, esto es, permitiendo que la empresa compitiera en el mercado sin privilegios públicos, una vez que se hubieran establecido medidas para asegurar una competitividad adecuada. Este paso se ha contemplado como un elemento imprescindible en el proceso de la reforma del sector público, culminando en muchos casos, pero no en todos, con la privatización (Walder, 1989; Kelsey, 1995).

La primera parte de la reforma consistía en la separación de actividades comerciales de las actividades reguladoras y administrativas dentro del sector público. De las instituciones públicas con actividades estrictamente comerciales se crearon corporaciones que compiten en el mercado sin ventajas particulares como cualquier empresa privada. Los privilegios como los derechos al monopolio y la financiación subvencionada se han suprimido; incluso se ha impuesto el régimen de pagos tributarios. Con un énfasis en la rentabilidad de los servicios proporcionados por el sector público, en el caso de que el gobierno exija servicios no comerciales de la corporación, estos servicios se negocian y pagan bajo un contrato aparte (Walter, 1989; Dalziel & Lattimore, 1991). Este principio de autofinanciamiento, y las medidas para aumentar la eficiencia de las empresas estatales tienen un alto grado de similitud con la reforma del sector público chileno.

También el concepto de la gerencia de la institución se revolucionó. Las corporaciones fueron reestructuradas bajo un nuevo gerente, proviniendo en muchos casos del sector privado. Los gerentes, o *Chief Executive Officers* (CEOs), se responsabilizaron del cumplimiento de los objetivos de la corporación de forma transparente y su remuneración depende del rendimiento de la corporación, como en el sector privado. También se ha introducido una flexibilización en los contratos laborales de los funcionarios (Kelsey, 1995).

## 4. LA REFORMA DEL ESTADO DE BIENESTAR

### 4.1. Chile y Nueva Zelanda

Una de las principales prioridades del gobierno chileno era reducir los gastos públicos en el estado de bienestar, y fomentar la sustitución del sector público como financiero y proveedor de servicios sociales por el sector privado, en cuanto esto fuera posible. Con miras a reducir el gasto público, el modelo del mercado libre fue extendido a otras áreas de la sociedad, mediante la privatización y descentralización de sectores como la salud, y la educación. Ya no ocuparía el Estado la posición del distribuidor y garantizador del Estado de Bienestar, sino que el sector privado asumiría un papel activo en la provisión de bienes y servicios públicos, supuestamente de manera más eficaz y, con la introducción de medidas de focalización, más rentable (Vergara, 1994; Del Campo, 1995).

A diferencia de Chile, en Nueva Zelanda existía una amplia red de prestaciones sociales que databa del siglo diecinueve (5), así que cuando los problemas fiscales se endurecieron en 1990, cortes a las prestaciones sociales de entre un 2.96% y un 24.7% fueron concebidos como una manera de aliviar la crisis fiscal amenazante (Dalziel & Lattimore, 1991:57). Las prestaciones por desempleo y enfermedad, así como las prestaciones para familias monoparentales fueron reducidas, asimismo las pensiones fueron congeladas durante dos años y la edad de jubilación se aumentó de 60 a 65 años y la prestación familiar fue abolida. Pruebas de nivel de ingresos fueron introducidas como requisitos previos para las

**Louisa Buckingham:** Del Proteccionismo a la Desregulación en Chile y Nueva Zelanda

57

(Primera Parte): Reformas Neoliberales en el Sector Público

*Ciencias Sociales Online*, Noviembre 2007, Vol. IV, No. 3 (49 - 66).

Universidad de Viña del Mar-Chile

transferencias sociales como el seguro de enfermedad, prestaciones para familias monoparentales, y prestaciones suplementarias para desempleados. Además, el sistema de las ayudas de vivienda que se basaba en un sistema de alquiler subvencionado de viviendas públicas se transformó en un sistema de bonos para familias de bajos ingresos para utilizar en el sector público o privado, mientras simultáneamente el coste de alquiler de las viviendas públicas se incrementó al nivel del mercado (Stephens, 1987; Kelsey, 1995).

#### **4.2. Las reformas en el sistema de salud**

El sistema de salud fue quizá el sector público chileno sometido a un mayor grado de transformación por las políticas de privatización y descentralización (Vergara, 1994). Antes de la reforma de 1981, el Estado financiaba el sistema de salud, aportando una parte del coste real del servicio junto con las contribuciones del empleado y empleador al Servicio Nacional de Salud (SNS). Para los socios del sistema SNS, el tratamiento médico era gratuito. La reforma de 1981 privatizó el sistema, introduciendo como proveedores compañías privadas llamadas Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Bajo el nuevo sistema, el servicio de salud mejora de forma proporcional a la contribución del socio, es decir, la calidad de tratamiento depende de la capacidad individual para pagar. Los socios del ISAPRES tienden de ser personas mejor situadas mientras que las personas de menores ingresos han permanecido como socios del SNS. No obstante, el elevado número de personas que se han trasladado al ISAPRES ha ocasionado la descapitalización del SNS, con una resultante reducción del servicio proporcionado y la introducción de una mayor financiación por parte del socio (Graham, 1994; Del Campo, 1995).

Por su parte, en Nueva Zelanda la organización del sistema de salud fue sometida a un cambio administrativo radical según el cual la financiación de los servicios de salud fue separada de su provisión. Las reformas previeron el establecimiento de cuatro autoridades regionales de salud con presupuestos fijos cuya responsabilidad constituyó la contratación de servicios de salud de entidades públicas o privadas para la población de cada región. Es decir, los hospitales públicos ahora compiten con los hospitales privados por contratos para la provisión de servicios sanitarios. A pesar de que hasta 1991 el gasto en salud creció en un 27% en términos reales, se ha registrado una creciente insatisfacción entre el público y el cuerpo médico con la caída de los niveles del servicio de salud (Massey, 1995:152).

#### **4.3. Las reformas en el sistema educativo**

En Chile, el sector de educación fue también sometido a la descentralización y a una reestructuración de presupuesto. Una modificación muy significativa de la administración y asignación de presupuesto para educación la constituye el crecimiento de la proporción del gasto descentralizado desde el 7.6% hasta superar el 60% entre 1977 y 1982, acompañado con una reducción de los fondos aportados directamente por el Estado del 71.4% al 16.9% (Jara Weitzmann, 1993). Es decir, de forma parecida a la que lo hizo la reforma de salud, la responsabilidad del sector municipal en la administración de las escuelas públicas aumentó.

Según Jara Weitzmann (1993), la composición del gasto público en educación también cambió: los gastos para la enseñanza preescolar y universitaria disminuyeron, mientras los gastos relativos de la enseñanza básica y media se incrementaron ligeramente. La contracción en la financiación pública de la enseñanza superior fue acompañada por una reestructuración y descentralización. Mientras en 1979 había ocho universidades en Chile, todas con sus sedes regionales, en 1982 existían 41 instituciones, de las cuales la mayoría se constituyeron como instituciones públicas descentralizadas.

De modo parejo al caso chileno, las reformas en el sector de educación neozelandés han tenido el objetivo de descentralizar el sistema y permitir una mayor elección entre las distintas

instituciones educativas por parte de estudiantes y alumnos. Como Kelsey (1995) explica, las escuelas se han vuelto unidades casi autónomas, dirigidas por el consejo de administración cuyos miembros son elegidos por los padres de los alumnos. Como el nivel de administración de cada escuela depende en buena medida de la capacidad de su población inmediata, la descentralización de la administración de las escuelas ha desaventajado seriamente a las escuelas ubicadas en zonas o regiones deprimidas económicamente con un menor nivel de formación general entre su población. Aunque el ministerio de educación aún negocia el nivel de los salarios de los maestros y profesores, los acuerdos ahora se basan en bandas de salarios en lugar de en una escala fija de remuneración. El consejo de administración de cada escuela determina tanto el gasto del presupuesto de la escuela como los salarios individuales dentro de estas bandas.

## 5. LOS COSTES SOCIALES

### 5.1 Chile: El aumento de la desigualdad

El aumento de la desigualdad durante las décadas de los setenta y ochenta se debe a un conjunto de circunstancias (6). Raczynski (1995:210) ha documentado cinco tendencias principales en los cambios del sector público bajo el NME que han influenciado profundamente la calidad de vida de la población chilena: un corte drástico de recursos, especialmente en los sectores de la vivienda, salud y educación (véase también Vergara 1994); la transferencia de las funciones de la ejecución y provisión de los servicios al sector privado, y la descentralización de los respectivos ministerios y departamentos; la introducción de las fuerzas del mercado en la asignación de los recursos públicos; la puesta en práctica de medidas específicas designadas para reducir programas anteriormente universales, para así destinar los recursos fiscales a los sectores más pobres de la población; y el establecimiento de programas sociales para aliviar situaciones extremas. Raczynski (1991) ha observado críticamente que las estrictas medidas de focalización de la política social garantizaba un cierto nivel mínimo de existencia entre los estratos más pobres sin apoyar “las potencialidades de ellos ni sus iniciativas” (p.144).

Dos factores adicionales desencadenaron el declive en los niveles de vida: el alto nivel de desempleo y una tendencia de aumento de los precios internos (Pampillón Olmeda, 1999). La tasa de desempleo aumentó bruscamente en 1974 como resultado de la eliminación de muchos puestos públicos y permaneció alta, para el contexto chileno, hasta los ochenta: 11.1% en 1981, o 15.7%, si se incluye el empleo generado por los programas de trabajo público, comparado con el 6-7% en la década de los sesenta. Tras la recesión entre 1982 y 1983, la tasa de desempleo superó el 20% durante casi cuatro años (1982-85) (Hachette & Lüder, 1993:22). También la distribución de la renta durante el régimen militar se deterioró. Según Laban & Larraín (1995:123), el coeficiente de Gini confirma el sesgo regresivo de la distribución de ingresos, pasando del 0.50 en 1970 a 0.54 desde 1982 a 1984. En 1975 el salario mínimo era del 62% en comparación con el nivel de 1970, mientras en 1989, los salarios reales eran aún sólo el 90.8% en relación a su nivel en 1970 (véase también Hecht-Openheim, 1999:143). La liberalización de los precios, la eliminación de las subvenciones y la aplicación del impuesto de valor añadido (IVA) a alimentos básicos, causaron un aumento del precio relativo de los productos alimentarios que desfavoreció sobre todo a los estratos bajos de la población chilena (Déniz Espinós, 1992).

No obstante los índices de desarrollo humano se mejoraron durante la dictadura a pesar de las dos grandes recesiones. La mejora se explica primero por los logros y el efecto de inercia de los programas sociales anteriores y, segundo, por los esfuerzos explícitos de dirigir los recursos hacia los segmentos de la población más vulnerables, en particular mujeres embarazadas y niños (Graham, 1994; Scott, 1996; Foxley & Raczynski 1984). Las medidas de distribución de la ayuda social fueron administradas por la Oficina de Planificación Nacional

(ODEPLAN) en las trece regiones administrativas descentralizadas. Según Graham (1994:29), algunos de los programas para mitigar la pobreza extrema constituyeron continuaciones o variaciones de los programas preexistentes con una cobertura reducida para incluir sólo a los estratos más pobres.

Los programas de empleo, el Programa de Empleo Mínimo (PEM), y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) tenían como objetivo aliviar los efectos de la crisis económica que aumentó las tasas de desempleo hasta un 30% en 1983 (Pampillon Olmedo 1999:120). Los programas tuvieron un presupuesto de 1.4% del PIB, y consumieron una gran parte del gasto social. En 1983, durante la crisis económica más severa, los programas emplearon hasta 500.000 personas, hombres y mujeres, el 11% de la fuerza laboral. Se eliminaron los programas cuando la tasa de empleo se recuperó. Como Graham (1994:34-41) explica, el PEM empezó como respuesta a la situación extrema de 1975 con el objetivo de ofrecer trabajo manual como compensación temporal, pagando un salario equivalente del 25% del salario mínimo. El POJH fue dirigido exclusivamente a los jefes de hogar que recibieron un 40% del salario mínimo. Además, en ambos casos los beneficiarios podían acceder al servicio de salud gratuito.

No obstante, el impacto social de las reformas junto con las recesiones mundiales de los setenta y ochenta excedió los beneficios paliativos de los programas sociales. Según Raczynski (1995:210) y la ONU (UNTCAD 1994), el porcentaje de las familias indigentes aumentó desde un 6% en 1969 hasta el 13% en 1987, mientras durante la crisis de 1982-83 el porcentaje alcanzó el 30%, mientras el porcentaje de los hogares pobres creció desde el 17% en 1969 hasta alcanzar el 38% en 1987. En 1990, el 34% de los hogares eran pobres (12% indigentes), el doble de hacía veinte años. La reducción del gasto social combinado con las medidas de focalización tuvo como consecuencia que los programas sociales respondieron a algunas de las necesidades más básicas, como la de la nutrición, educación primaria, y salud preventiva (para madres y niños), mientras otros ámbitos sociales como la vivienda, la salud curativa y la educación superior, carecieron de financiación (Vergara, 1994:242).

## **5.2. Nueva Zelanda: El aumento de la desigualdad**

En 1994, la revista *The Economist* (Nov 5, 1994:19) declaró que no era una coincidencia que los incrementos de desigualdad mayores se hubieran producido en economías como EEUU, Gran Bretaña, y Nueva Zelanda donde las políticas de mercado libre han sido perseguidas de manera más ferviente. De forma parecida al caso chileno, en Nueva Zelanda, el aumento del margen de desigualdad se debió al desempleo y las reducciones en el Estado de bienestar.

El proceso de privatizaciones y la corporativización de las empresas públicas redundaron en reducciones significativas de la plantilla, debida, por un parte, a la transferencia de personal a las nuevas corporaciones, y, por otra parte, a la eliminación de muchos puestos de empleo, generando así altas tasas de desempleo, que desde un 5% en 1984 ascendieron a un 14% en 1992 (Dalziel & Lattimore, 1991:114).

La reducción de las prestaciones sociales (7) y las estrictas medidas de focalización se justificaron como un modo de fomentar la autosuficiencia. No obstante bajo el gobierno laborista, entre 1984 y 1990 el número de beneficiarios de prestaciones sociales (excluyendo las pensiones) casi se duplicó. La dependencia de las prestaciones sociales continuó creciendo bajo el gobierno conservador, junto con el crecimiento de la tasa de desempleo. Así que, según fuentes oficiales (Government Press Publications, 1995) a pesar de los cortes efectuados, entre 1989 y 1993 el gasto en prestaciones sociales se incrementó desde el 20.2% hasta el 23.9% del PIB. En 1993, un dólar de cada tres recibido por hogares de bajos ingresos provenía de una prestación social, comparado con uno de cada siete hacía una década.

Representativo del mayor grado de inequidad en la distribución de la renta, el coeficiente de Gini aumentó desde 0.353 en 1983 hasta 0.40 en 1995 (Dalziel, 2002).

Este aumento en los niveles de la pobreza se ha achacado a las reformas al sector público con el resultante deterioro del mercado laboral y la eliminación de servicios prestados gratuitamente por parte del Estado de bienestar, con la consecuencia de que el gasto por hogar en servicios de salud y educación se multiplicó por cinco desde 1983. El grupo más grande del segmento pobre estaba compuesto por familias con niños con casi el 29% de todos los niños en el quintil más bajo (Easton 1995:205). Mientras en 1994, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestó que durante la década anterior Nueva Zelanda había caído del puesto 16 al puesto 18 en el índice de desarrollo humano (PNUD, 1994:104).

Un símbolo visible de la pobreza es el fenómeno del *Banco de Alimentos*, es decir, la distribución por parte de ONGs de alimentos básicos a gente pobre. Según fuentes oficiales (Government Press Publications, 1998:156), existen más de 360 Bancos de Alimentos, que reparten paquetes de comida en todos los centros urbanos. Las ONGs registraron incrementos enormes de la demanda de asistencia con la introducción de las reformas a las prestaciones sociales. Todas manifiestan que los destinatarios en su mayoría son personas con hijos de una edad menor a 35 años (un tercio constituye familias monoparentales) y señalan una representación desproporcionada de la población maorí y polinesia.

## 6 CONCLUSIONES

La adopción del NME alteró de manera inmediata la participación estatal en la economía y esto se ha hecho evidente en la desregularización y la privatización del sector público. En Chile, el proceso de privatizaciones ocurrió en dos etapas. La primera, la más amplia, tuvo el objetivo de incrementar las rentas públicas, y mermar la presencia del Estado en la economía. Las empresas no fueron reestructuradas antes de privatizarlas y la participación de extranjeros en el proceso fue escasa. La privatización de los bancos, previa a otros sectores de la economía, ocasionó una alta concentración del mercado, que contribuyó luego a la crisis financiera de 1982 y 1983. Como resultado de esta crisis, en la segunda etapa se priorizó en la participación de sectores más amplios en el proceso mediante dos estrategias; primero, la oferta de acciones a precios favorables a empleados de las empresas en vías de privatización; y segundo, la mayor participación extranjera en el proceso, promovido por el programa deudavalores swap.

A diferencia de Chile, la participación extranjera en el proceso de privatizaciones en Nueva Zelanda fue promovida desde el principio. Además el gobierno resistió las presiones para favorecer a un determinado grupo de agentes económicos, como la oferta de acciones a empleados de las empresas en vías de privatización. El factor que caracterizó el proceso de las privatizaciones en Nueva Zelanda era el proceso de desregulación del mercado (incluso la potenciación de la competencia dentro del sector del mercado) y la corporativización de las empresas anterior al proceso de privatización. Estas medidas fueron motivadas por la experiencia de numerosos países que ha mostrado que los beneficios agregados obtenidos por la transferencia de un monopolio del sector público al sector privado suelen ser muy limitados.

Ambos países han llevado a cabo políticas de descentralización en los servicios de salud y educación y han incrementado la participación de los usuarios en los costes reales de los servicios. Los sistemas públicos de salud y de educación han sufrido un proceso de desfinanciación. En el sector de educación, la financiación pública de las universidades ha sido severamente mermada, mientras se ha aumentado la participación de los estudiantes en los

costes de su educación. Tanto en Nueva Zelanda como en Chile, el nivel de descentralización en el sector de educación ha desfavorecido las regiones de bajo nivel socioeconómico, donde la comunidad no necesariamente cuenta con la capacidad de participar en la gerencia de las escuelas en la misma manera que regiones o zonas de mayor nivel socioeconómico.

A pesar del alto grado de consenso sobre los logros positivos del modelo neoliberal en modernizar y estabilizar la economía chilena y neozelandesa, el aumento dramático de la desigualdad, en términos de la distribución de la renta, ha hecho evidente una tendencia concentradora del neoliberalismo. Durante las primeras etapas de las reformas neoliberales, las medidas desarrolladas en ambos países para mitigar los afectos de la pobreza se limitaron a identificar los grupos que subsisten por debajo del nivel mínimo, y proveerles con los bienes y servicios necesarios para alcanzar el nivel mínimo establecido. Como ejemplo de ello, las subvenciones y ayudas en ambos países no fueron previstas para mejorar la equidad social, y los programas de empleo en Chile carecían de una vertiente formativa que impartiera las habilidades y destrezas favorecidas en un mercado laboral en vías de modernización, mientras ofrecían un salario que constituía sólo una fracción del salario mínimo (véase Graham, 1994).

No obstante, en Chile, el regreso de la democracia en 1990 supuso un mayor grado de inversión del Estado para combatir la pobreza (Raczynski, 1995:210, véase también Cox 1997 para una descripción de las reformas educativas de los años noventa) y efectivamente, los índices de pobreza mejoraron sustancialmente entre 1990 y 1996 (8). Bajo la administración del Presidente Aylwin, las políticas de la focalización se han ampliado y nuevas instituciones han sido establecidas: el Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. También han recibido apoyo las PYMEs urbanas y rurales. Además una reforma laboral, introducida en 1990, buscaba restaurar los poderes de negociación de los trabajadores frente a los contratadores. El espíritu de 'invertir en la gente', el combate a la pobreza y la desigualdad continuaron bajo el mandato del presidente Frei a partir de 1994 (French-Davis, 1999:149). Políticas sociales que combaten la pobreza constituyen también una contribución al crecimiento económico en la medida de que se dirijan a una inversión en el capital humano, y, como consecuencia, políticas específicas dirigidas hacia los sectores pobres y vulnerables, políticas con adecuado financiamiento y ejecutadas eficientemente resultan indispensables.

## NOTAS

1 Chislett (1993:61) destaca que el proceso de privatización fue mucho más veloz y amplio en Nueva Zelanda y Chile que en Gran Bretaña, citando un estudio independiente que concluye que, en relación al tamaño de ambas economías, Chile trasladó dos veces más que Gran Bretaña el valor de activos estatales al sector privado en la mitad del tiempo.

2 Aunque la mayoría de los países latinoamericanos restringía la participación de empresas extranjeras en ciertos sectores de la economía (por ejemplo, los Programas Sectorales de Desarrollo Industrial establecidos en el Pacto Andino, al que Chile perteneció hasta 1975, limitaban explícitamente el porcentaje permisible de participación de empresas extranjeras), a partir de los ochenta, las restricciones se relajaron en Chile (Boeker, en: Boeker 1993), y en la actualidad empresas extranjeras controlan habitualmente sectores estratégicos como las telecomunicaciones y el transporte aéreo. Asimismo, Chile ha adquirido empresas argentinas en el sector de la distribución de electricidad.

3 El autor sostiene que: "si se analiza el flujo de ingresos fiscales originados en las privatizaciones, se puede comprobar que en sólo cuatro años el programa chileno ha representado al menos el doble de lo implementado en Gran Bretaña en ocho años" (1989:34).

4 El programa de deuda – valores swap, conocido como Capítulo 19, permitía a los inversores comprar la deuda privada en el mercado secundario y convertirla en deuda interna. La deuda luego se vendía en el mercado secundario doméstico y los beneficios se utilizaban para adquirir activos productivos domésticos, incluyendo empresas públicas en vías de privatización, o financiar proyectos de inversión doméstica. Hubo restricciones en la repatriación de beneficios y del principal durante los primeros años (Edwards, 1995:76; véanse también: French-Davies, 1998;1999; Hachet & Lüders, 1993).

5 La pensión universal en Nueva Zelanda data de 1898.

6 Véase CEPAL (1991) para una descripción detallada de la pobreza en Chile durante esta época.

7 Según las fuentes oficiales de UNESCO, bajaron del 13% del PIB en 1991 al 11% en 1997 (UNESCO, 1998).

8 Las estadísticas de la ONU muestran una disminución de la indigencia de 14% de los hogares en 1987 a 5% en 1996, mientras los índices de pobreza se redujeron casi un 50% en el mismo periodo (UNCTD, 1994).

## BIBLIOGRAFÍA

Boeker, P. H. (ed.) (1993) *Latin Americas´ s Turnaround*. California: Institute for Contemporary Studies.

Boeker P. H. (1993) *Latin America´s Economic opening and the rediscovery of Foreign Investment*. En: *Latin America´s Turnaround*. Boeker, P. H. (ed.) California: Institute for Contemporary Studies.

CEPAL (1991) "Magnitud de la pobreza en Chile." Colección de estudios CIEPLAN No. 3, pp. 113-129.

Chislett, W. (1993) *Chile: Stability and Progress*. London: Euromoney Publications.

Choksi, A. & Papegeorgiou, D. (eds.) (1986) *Economic Liberalization in Developing Countries*. Oxford: Basil Blackwell.

Cox, C. (1997) "La reforma de la educación chilena: contexto, contenidos, implementación." Colección de estudios CIEPLAN No. 45, pp. 5-32.

**Louisa Buckingham:** Del Proteccionismo a la Desregulación en Chile y Nueva Zelanda (Primera Parte): Reformas Neoliberales en el Sector Público  
**Ciencias Sociales Online**, Noviembre 2007, Vol. IV, No. 3 (49 - 66).  
Universidad de Viña del Mar-Chile

- Dalziel, P. & Lattimore, R. (1991) *The NZ Economy: a briefing on reforms*. Oxford University Press.
- Dalziel, P. (2002) "New Zealand's Economic Reforms: An Assessment." *Review of Political Economy*. 14:1, pp. 31-46.
- Del Campo, E. (1995) *Estado y mercado: una revisión desde la ciudadanía en el caso de Chile*, en: Alcántara, M. & Crespo, I. (eds.) *Los límites de la consolidación democrática en América Latina*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Déniz Espinós, J. A. (1992) "La política económica neoliberal y sus efectos socioeconómicos. El caso de Chile". *Cuadernos Americanos*, 32, p. 77-87.
- Dornbusch, R. & Edwards, S. (eds.) (1995) *Reform, Recovery and growth: Latin America and the Middle East*. National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press.
- Easton, B. (1995) "Poverty in New Zealand: 1981-1993." *New Zealand Sociology* 10:2, pp.182-213.
- The Economist (1994) 5 de noviembre, 1994:19.
- Edwards, S. (1986) *Stabilization with Liberalization: An Evaluation of Ten Years of Chile's Experience with Free Market Policies, 1973-1983*, in: *Economic Liberalization in Developing Countries*. Choksi, Armeane y Demetris Papageorgiou (eds.). Basil Blackwell, Oxford.
- Edwards, S. (1995) *Crisis and Reform in Latin America*. Oxford University Press.
- Ffrench-Davis, R. (1988) "Esbozo de un planteamiento neoestructuralista" *CEPAL*, 34.
- Ffrench-Davis, R. (1991) "Desarrollo económico y equidad en Chile: herencias y desafíos en el retorno a la democracia." Colección estudios CIEPLAN No 31, pp. 31-51.
- Ffrench-Davis, R. (1999) *Macroeconomía, comercio y finanzas para reformar las reformas en América Latina*. McGraw Hill, Santiago.
- Foxley, A. & Raczynski, D. (1984) "Vulnerable Groups in Recessionary Situations: The Case of Children and the Young in Chile". *World Development*, 12:3, pp. 223-246.
- Government Press Publications (1995) *Statistics New Zealand*. Wellington: Government Press Publications.
- Government Press Publications (1998) *New Zealand Official Yearbook*. Wellington: Government Press Publications.
- Graham, C. (1994) *Safety nets, Politics and the Poor*. Brookings Institution.
- Hachett, D. & Lüders R. (1993) *Privatization in Chile: an Economic Appraisal*. California: International Centre for Economic Growth Publications.
- Harberger, A. C. (1986) *A Primer on the Chilean Economy, 1973-1983*. In: *Economic Liberalization in Developing Countries*. Choksi, Armeane y Papageorgiou (eds). Oxford: Basil Blackwell.

- Hecht Oppenheim, L. (1999) *Politics in Chile*. Colorado: Westview Press.
- Jara Weitzmann, A. (1993) *Chilean Education policy: Authoritarianism and Democracy*, in: *Welfare, poverty and Development in Latin America*. Abel, C. & Lewis, M. C. (eds.). London: Macmillan Press.
- Kelsey, J. (1995) *The New Zealand Experiment*. Auckland: Auckland University Press.
- Labán, R. & Larraín, F. (1995) *Continuity, Change, and the Political Economy of Transition in Chile*. En: *Reform, Recovery and growth: Latin America and the Middle East*. Dornbusch, R. & Edwards, S. (eds.) National Bureau of Economic Research. Chicago: University of Chicago Press.
- Larrazin, F. y Meller, P. (1990) La experiencia socialista-populista chilena: la unidad popular, 1970 – 1973. Colección estudios de CIEPLAN No. 30, pp. 151.196.
- Malamud, C. (1995) *América Latina, Siglo XX. La búsqueda de la democracia*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Marcel, M. (1989) “Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88.” Colección estudios de CIEPLAN No 26, pp. 5-60.
- Massey, P. (1995) *Market Liberalization in a Developed Economy*. Macmillan Press Ltd, London.
- Meller, P. (1991) “Adjustment and Social Costs in Chile During the 1980s”. *World Development*, 19:11, pp.1545-1561.
- Meller, P. (1996) *Un siglo de economía política chilena*. Andres Bello, Santiago
- Montecinos, V. (1998) *Politics and the Chilean Economy: 1958-1990*. Amsterdam: CEDLA.
- Organización para la Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) (1999) *Economic Surveys: New Zealand*. Paris: OCDE.
- Pampillón Olmedo, R. (1999) *Análisis económico de países: Teoría y casos de política económica*. Madrid: McGraw Hill.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994) *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- Raczynski, D. (1991) “Descentralización y políticas sociales: lecciones de la experiencia chilena y tareas pendientes.” Colección estudios CIEPLAN No 3, pp. 141.15.
- Raczynski, D. (1995) *Programs, Institutions and Resources: Chile*. En: Raczynski, D. (ed.), *Strategies to Combat Poverty in Latin America*. Inter-American Development Bank, Washington.
- Rayner, T., Layton, B., Wooding, P., Rose, D. & Sutch, H. (1988) *New Zealand in a changing world: the management of economic change*. Conferencia, Dunedin, 17-19 agosto, 1988. Institute of Policy Studies, Victoria University Press.

Scott, C. (1996) *The Distributive Impact of the New Economic Model in Chile*. In: *The New Economic Model in Latin America and its Impact on Income Distribution and Poverty*. Bulmer-Thomas, V. London: Macmillan Press Ltd.

Spencer, G. & Carey, D. (1989) *Financial Policy Reform*. In: *Rogernomics: Shaping NZ's Economy*. Walder, Simon (ed). NZ Centre for Independent Studies, Auckland.

Stephens, B. (1987) *Social Policy Reform: in Retrospect and Prospect*. In: *Economic Liberalization in New Zealand*, Bollard, Alan and Robert Buckle (eds.), Allen & Unwin.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1994) *Handbook of Trade and Development Statistics*. New York: UNCTAD.

Vergara, P. (1994) *Market Economy, Social Welfare and Democratic Consolidation in Chile*. En: Smith, Aruña, Ganara (eds.) *Democracy, Markets and Structural Reform in Latin America*. North South Center, University of Miami.

Walder, S. (ed.) (1989) *Rogernomics: Shaping NZ's Economy*. Auckland: NZ Centre for Independent Studies.